



RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010025695 DEL 18/07/2014

POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual "*se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones*", es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que "*La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior.*"

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los Decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de COROMORO, departamento de SANTANDER es de categoría 6, y fue prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2012, y para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010010035, del 4 de abril de 2014, la SSPD decidió **DESCERTIFICAR** al municipio de COROMORO, del departamento de SANTANDER por no haber cumplido el siguiente criterio previsto en el artículo 5° del Decreto 1639 de 2013.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

a) Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la SSPD relacionada con el cargue de información al sistema.

2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010010035 del 4 de abril de 2014

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010010035 se envió citación al señor alcalde del municipio de COROMORO, del departamento de SANTANDER, mediante el oficio No. SSPD 20144010189791, del 4 de abril de 2014, enviado por correo certificado el 11 de abril del año en curso, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Transcurrido el término para que el representante legal del ente territorial compareciera a notificarse personalmente del contenido de la Resolución SSPD No. 20144010010035, sin que ello ocurriera, se procedió a enviar el respectivo aviso de notificación mediante el oficio No. SSPD 20144010213911. De acuerdo a la información remitida por la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. éste documento fue entregado el 28 de abril de 2014 en la Alcaldía Municipal, por lo tanto y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la notificación se considera surtida al día siguiente de su entrega en el lugar de destino.

Ahora bien, el señor WILSON HERNÁN SANABRIA PICO, en su calidad de alcalde del municipio de COROMORO, del departamento de SANTANDER, mediante documento radicado en esta entidad bajo los Nos. SSPD 20145290241202 del 13 de mayo y 20145290252492 del 16 de mayo de 2014, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010010035.

III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN**3.1 Verificación de los requisitos de forma**

El artículo 77 del C.P.A.C.A., establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos; los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el alcalde del municipio de COROMORO, del departamento de SANTANDER, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal; por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, el escrito radicado con los Nos. SSPD 20145290241202, del 13 de mayo y 20145290252492, del 16 de mayo de 2014, reúne los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A., por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

3.2 Argumentos del recurrente

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

"FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD.

1.- Determinó la Resolución SSPD SSPD-20144010010035 del 4 de abril de 2014 suscrita por el Superintendente Delegado para acueducto, Alcantarillado y Aseo, que al evaluar la información reportada por el Municipio de Coromoro, Santander, en el Sistema único de información SUI, el Municipio de Coromoro Santander no cumplió con todos los requisitos necesarios para que esa Superintendencia expidiera la certificación a que se refiere el parágrafo del artículo 4 de la ley 1176 de 2007, con las consecuencias establecidas en el artículo 13 del decreto 1040 de 2012. En el análisis y evaluación efectuada se concluye lo siguiente:

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

(Se transcribe el análisis de cada uno de los aspectos realizado en la Resolución No. SSPD 20144010010035 del 4 de abril de 2014)

2.- Así, de acuerdo con lo anterior, se ha señalado entonces en razón la extemporaneidad en la remisión de información sobre la "implementación y aplicación de metodologías tarifarias expedidas porta CRA" que el Municipio de Coromoro no cumplió con todos los requisitos necesarios para que esa Superintendencia expida la certificación a que se refiere el parágrafo del artículo 4 de la ley 1176 de 20071, y que por tanto es dable aplicar las consecuencias establecidas en el artículo 13 de decreto 1040 de 2012.

3.- Sobre lo anterior (y son los fundamentos del presente recurso), debemos precisar lo siguiente:

a. - El Municipio de Coromoro Santander, como prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo según el análisis que se efectúa en la resolución SSPD SSPD-20144010010035 del 4 de abril de 2014 si cumplió los criterios establecidos para los Municipios de categorías 4,5 y 6, de ello da cuenta el análisis que en dicho acto administrativo se efectúa pro parte del organismo de control.

b.- El motivo que sustenta la descertificación al Municipio de Coromoro Santander, para la administración de los recursos del Sistema General de participaciones para agua potable y saneamiento básico, es el reporte extemporáneo en el SUI del acto de aprobación de tarifas para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el cual según el inciso 2 del artículo 7 del decreto 1639 de 2013 debía ser reportado a más tardar el 30 de agosto de 2013, siendo reportado el 12 de septiembre de 2013.

c.- Frente a la extemporaneidad que se le endilga al MUNICIPIO DE COROMORO y que en criterio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, le hace acreedor de la descertificación para el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico tenemos:

c.1. Del informe y análisis efectuado en la Resolución SSPD SSPD-20144010010035 del 4 de abril de 2014 suscrita por el Superintendente Delegado para acueducto, Alcantarillado y Aseo, se concluye que el MUNICIPIO DE COROMORO ha sido cumplidor de las obligaciones y criterios impuestos para continuar con la administración los recursos del Sistema General de Participaciones para el agua potable y saneamiento básico.

c.2. Que si bien el MUNICIPIO DE COROMORO atendió DOCE (12) días después del termino señalado, con el reporte ante el SUI del acto de aprobación de tarifas para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, esta no puede constituirse por sí sola en el criterio único considerado para concluir en la descertificación del ente territorial para el manejo de los recursos de agua potable y saneamiento básico

c.3. Que esta presunta omisión, no fue voluntaria o caprichosa del ente territorial investigado, pues para el 30 de agosto de 2013 los formatos no se encontraban habilitados en la plataforma para la vigencia 2012, siendo este el año que estaba evaluando, lo cual es corroborado con los pantallazos que con este escrito se adjuntan y que serán ratificados con las testimoniales. que se practicaran, los cuales se constituyen en las únicas razones para que el MUNICIPIO DE COROMORO efectuara esta rendición doce (12) días después al tiempo reglamentario estipulado.

c.4. Que el objetivo de la certificación en el manejo de los recursos es el de garantizar el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, lo cual como se ha explicado y concluyó la misma Superintendencia si ha cumplido el MUNICIPIO DE COROMORO, situación fundamental que no se puede desatender por el organismo de control y vigilancia por un aspecto eminentemente de forma (extemporaneidad de tan solo 12 días en la rendición de una información), pero que si se puede afectar con la descertificación decretada.

d.- 2. Como otro elemento de defensa, frente a la potestad sancionatoria administrativa, se ha dicho que su efecto y carácter es eminentemente preventivo, opuesta totalmente a la sancionatoria penal cuya naturaleza resulta esencialmente correctiva. En opinión de algunos autores, la función sancionatoria de la administración "tiene significativo carácter preventivo, constituyéndose ésta en una de sus más sobresalientes notas. La sanción administrativa tiene por finalidad normativa - y ello constituye la base de la competencia de la autoridad facultada para su imposición- evitar la comisión de infracciones que atenten contra la integridad de los bienes jurídicos cuya protección le

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

ha sido atribuida por el legislador a la autoridad administrativa" JAIME OSSA ARBELÁEZ, "Derecho Administrativo Sancionador".
En idéntico sentido la Corte Constitucional en sentencia No. C-214 de 28 de abril de 1994. M.P.: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL señaló:

"La potestad administrativa sancionadora de la administración, se traduce normalmente en la sanción correctiva y disciplinaria para reprimir las acciones u omisiones antijurídicas y constituye un complemento de la potestad de mando, pues contribuye a asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas".
Recuérdese que en el derecho sancionatorio, no basta la comisión de la conducta reprochable para endilgar responsabilidad, se requiere que previamente se realice una valoración de la actuación del agente, con miras a determinar el grado de participación del implicado, realizando un examen sobre las circunstancias que pudieron haber incidido en la realización de tal comportamiento. Dentro de tales directrices, existe un principio rector en el derecho sancionatorio, que se deriva de la aplicación del debido proceso, y es el de la culpabilidad.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, a partir de los principios dispuestos en la Constitución de 1991, han señalado unas directrices específicas que se deben atender, en materia de derecho administrativo sancionatorio. En este sentido el Consejo de Estado ha manifestado que la culpabilidad debe estar demostrada, como elemento esencial e indispensable para la imposición de sanciones administrativas: "Para la Sala la responsabilidad objetiva, está proscrita en materia sancionatorio desde la vigencia de la Constitución de 1991, en donde se hizo extensivo el debido proceso a las actuaciones administrativas. Una sanción no puede imponerse sin observar todas las garantías del debido proceso, entre otras a que se le presuma inocente mientras no se le compruebe su culpabilidad".

Igual posición es asumida por la Corte Constitucional, así:

"La potestad sancionatorio de la administración debe ceñirse a los principios generales que rigen las actuaciones administrativas, máxime si la decisión afecta negativamente al administrado privándolo de un bien o de un derecho: revocación de un acto favorable, imposición de una multa, pérdida de un derecho o de una legítima expectativa, modificación de una situación jurídica de carácter particular y concreto, etc. En tales casos, la pérdida de la situación jurídico-administrativa de ventaja debe ser consecuencia de una conducta ilegal y culposa cuya sanción sea impuesta al término de un procedimiento en el que esté garantizada la participación del sujeto y el ejercicio efectivo de su derecho de defensa.

En los anteriores términos con razonabilidad, certeza y con fundamento en el ordenamiento reiteramos a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que al momento de definir esta investigación administrativa tenga en cuenta la razones expuestas por la investigada y en consecuencia dado el proceder y actuar que ha observado tanto en la administración, como en la inversión de los recursos, no sea descertificada en la administración de los recursos del sistema general de participaciones para agua potable y saneamiento básico.

e.- De acuerdo al análisis anteriormente expuesto se logra comprobar que el Municipio de Coromoro si ha dado total cumplimiento a los criterios previstos en el artículo 2 del decreto 1629 de 2012, y por tanto si es procedente que se le certifique en relación con la administración de los recursos del Sistema General de participaciones.

Son los anteriores argumentos, los que nos permiten insistir en la revocatoria de la resolución número Resolución SSPD-20144010010035 del 4 de abril de 2014 y consecuentemente certificar a la entidad territorial con fundamento en el parágrafo del artículo 4 de la ley 1176 de 2007.

PRUEBAS

Con el objeto de demostrar los hechos y argumentos de defensa presentados en el acápite precedente, con lo cuales se explica y justifica razonablemente los hechos, causas o motivos por los cuales fue rendida en forma extemporánea la información al Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio MVCT, comedidamente le permito solicitar se

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

sirva decretar, practicar, asumir y valorar oportunamente para el publicitario la siguiente:

a.- **TESTIMONIAL:** *Sírvase decretar la práctica de prueba testimonial, cuyos deponentes expondrán la ciencia de su dicho, ante autoridad comisionada o pedida en colaboración en la ciudad de Bucaramanga, según sea el caso y declarante a deponer, (objeto) respecto de los hechos que son fundamento de los argumentos defensivos que se expusieron por la defensa así:*

a. - *Al señor MAURICIO HERNANDO LOZANO VESGA secretario de Gobierno del Municipio de Coromoro o quien haga sus veces, para que con pertinencia y conducencia exprese la ciencia de su dicho sobre los aspectos fundamentales de defensa expuestos descritos en objeto probatorio.*

b.- *Igualmente a la señora MARITZA ANEAD SILVA, contratista del Municipio quien para la época de los hechos fue la persona que estuvo a cargo del proceso de transformación de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio y quien igualmente era la persona encargada en el Municipio de Coromoro de rendir la información al Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio MVCT, y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por la cual se ha determinado no certificar al MUNICIPIO DE COROMORO la administración de los recursos del Sistema General de participaciones para agua potable y saneamiento básico. Contratista que expresara la ciencia de su dicho respecto los hechos motivo de investigación específicamente lo relacionado con las razones, inconvenientes e impedimentos que en su momento se presentaron y que impidieron rendir antes del 30 de agosto de 2013 la información, por la cual se pretende descertificarla Municipio.*

Los declarantes podrán ser citados por comunicación enviada a la alcaldía municipal de Coromoro ubicada en la Carrera 5 No 5-22 del Municipio de Coromoro y conforme a la regulación existente en la norma C.P.A.C.A. concordante con el C. P. C. podrán adjuntar documentos que demuestren la ciencia de su dicho expuesto al finalizar su exposición."

3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con el documento radicado Nos. SSPD 20145290241202 y 20145290252492, por medio de los cuales se sustentó el recurso de reposición, se allegaron las siguientes pruebas:

3.3.1. Pantallazos del cargue al SUI del formato acto de aprobación de tarifas

3.3.2. Pantallazo de la mesa de ayuda No. 274393 BC del 11 de septiembre de 2014 junto con la respuesta generada por la superintendencia.

Los anteriores documentos, en su valor integral, se anexan al expediente.

IV. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

4.1. Pruebas solicitadas por el recurrente en sede del recurso de reposición

A través del mencionado recurso el municipio solicitó la práctica de dos testimonios con el objeto de acreditar que la plataforma del SUI presentó inconvenientes para efectos de cargar el acto de aprobación de tarifas, lo que condujo finalmente a su cargue extemporáneo, por lo cual la entidad procede a analizar esta solicitud.

El artículo 79 de la Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A., prevé el régimen jurídico aplicable a la solicitud y decreto de pruebas dentro del trámite de un recurso en sede administrativa, en los siguientes términos: " (.....) Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días.

En el acto que decreta la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.

El Consejo de Estado ha interpretado en el siguiente sentido las normas relativas a la práctica de pruebas en el curso de un procedimiento administrativo en los siguientes términos:

"De una parte, el hecho de que la autoridad niegue la práctica de una prueba, no implica per se desconocimiento del debido proceso y el derecho de defensa, pues no hay que olvidar que la conducencia y la eficacia de los medios probatorios son principios que informan la práctica de las pruebas. Como es sabido, la conducencia de la prueba, es la aptitud legal o jurídica que tiene esta, para convencer al fallador sobre el hecho a que se refiere. Este requisito, como lo ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia, persigue un fin que apunta a la economía procesal, evitando que se entorpezca y dificulte la actividad probatoria con medios que de antemano se sabe no prestarán servicio alguno al proceso." (Negrilla fuera de texto).

Ahora bien, la entidad considera pertinente acudir a la normativa vigente en materia probatoria para definir con claridad las características que las pruebas deben cumplir para ser decretadas, por lo cual resulta ineludible la remisión al Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012, que establece lo siguiente: ***"Artículo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles."*** (Negrilla fuera de texto)

Por su parte el Consejo de Estado ha analizado las características que deben cumplir las pruebas para que las mismas sirvan al proceso, tal como lo describe en el extracto jurisprudencial que se cita a continuación:

"Desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener estas características, deben estar permitidas por la ley."² (Negrilla fuera de texto)

En el recurso bajo revisión, la entidad advierte que la solicitud de la prueba correspondiente a los testimonios de MAURICIO HERNANDO LOZANO VESGA y MARITZA ANEAD SILVA, para efectos de acreditar que no estaba habilitado el formato para reportar el acto de aprobación de tarifas en el SUI, no es procedente por los motivos que se expondrán a continuación:

La entidad encuentra que la definición sobre la habilitación del formato para cargar el acto de aprobación de tarifas fue absuelta mediante la mesa de ayuda No. 274393 BC del 11 de septiembre de 2014, y mediante el radicado No. 20131800645891, del 1 de octubre de 2013.

Por lo anterior la solicitud de pruebas no cumple con el requisito de utilidad para efectos de acreditar si los formatos para cargar el acto de aprobación de tarifas estaban habilitados, puesto que este análisis ya fue realizado y decidido por la entidad, y en esa medida no es necesario decretar unas pruebas de una situación que ya conoce la superintendencia.

Como resultado del anterior análisis, la superintendencia deniega la práctica de las pruebas solicitadas.

¹ Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2010. Radicación No. 25000-23-25-000-2000-05721-01(2920-04); M.P. Dr Luis Rafael Vergara Quintero.

² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia, Auto del 19 de agosto. Radicación 25001-23-27-000-2007-00105-02(18093). MP Hugo Fernando Bastidas Becerra.

4.2. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito: Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionada con el cargue de información al sistema. Frente a este criterio alega el municipio que el cargue del acto de aprobación de tarifas fue extemporáneo puesto que no estaba habilitado el formato al momento de realizar el reporte.

Tal como lo señala el recurrente, a través de la mesa de ayuda No. 274393 BC del 11 de septiembre de 2014, la Alcaldía Municipal de Coromoro expresó:

"BUEN DIA,

CORDIALMENTE SOLICITO HABILITAR LOS SIGUIENTES FORMATOS, PUESTO QUE NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA PÁGINA:

- ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS ACUEDUCTO PDF - CARGUE MASIVO - AÑO 2012 - SERVICIO ACUEDUCTO

ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS ALCANTARILLADO (sic) PDF - CARGUE MASIVO - AÑO 2012 - SERVICIO ALCANTARILLADO (sic)

USUARIO: ALC_ALC

CLAVE : 2013coro "

Al respecto, y después de analizar lo solicitado, se generó la siguiente respuesta:

"SUI_LINA CASTRO comenta:

2013/12:04:39

01-10-

(.....)

Se le contestara al prestador que debe proceder a reportar los formatos para el periodo eventual 2009, ya que son anual una vez y para que se le pueda habilitar para el año 2012, no debe tener pendiente este formato 2009. "

"SUI_YURANY SUAREZ responde:

2013/08:57:55

16-10-

3143309761

Se comunica la empresa para averiguar por la solicitud, Se le indica que esta ya fue contestada y se le indico

He recibido su solicitud de habilitación de los formatos

- ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS ACUEDUCTO PDF

- ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS ALCANTARILLADO PDF (sic)

Periodo A2012 registrada con mesa de ayuda SUI 274393 BC.

Al respecto me permito informarle que debe proceder a reportar los formatos para el periodo eventual 2009, ya que son anual una vez y para que se le pueda habilitar para el año 2012, no debe tener pendiente este formato 2009. "

Así mismo, mediante el radicado No. 20131800645891, del 1 de octubre de 2013 la superintendencia expuso lo siguiente frente a la solicitud del representante de la Alcaldía Municipal, para tramitar la habilitación de los formatos a los que se ha hecho referencia:

"ASUNTO: Su solicitud radicada ante esta superintendencia mediante la cual requiere habilitar de forma urgente el formato PDF Acto de Aprobación de Tarifas de Acueducto y Alcantarillado año 2012, toda vez que se ha realizado la solicitud por mesa de ayuda Solicitud No. 274393 y hasta el momento no se nos ha dado respuesta.

Al respecto, nos permitimos informarle que se revisó en el Sistema Único de Información – SUI – y se pudo constatar que el prestador a su cargo presenta habilitado y en estado

Pendiente el formato Acto de Aprobación de Tarifas Acueducto y Alcantarillado PDF, para el año 2009, periodicidad eventual, por lo tanto deberá proceder con el cargue de esta información, ya que no es posible su habilitación para el año 2012, por tener este formato pendiente en otra periodicidad.

Ahora bien, lo invitamos a realizar la actualización del Registro Único de Prestadores – RUPS, conforme a lo establecido en el Artículo 1.1.1.4. del anexo de la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010, el cual indica que los prestadores de los Servicios Públicos deben actualizar la información del RUPS por lo menos una vez al año.
Negrilla fuera de texto

Frente a este criterio alega el municipio que se encontraba en imposibilidad de cargar el acto de aprobación de tarifas, y por ello no se puede predicar un incumplimiento por parte del municipio, invocando el hecho de que el formato no estuviera habilitado como una causal de exoneración.

En primer lugar, es necesario advertir que el deber del municipio de tener la precaución y diligencia de verificar con antelación que los formatos y formularios del SUI estén habilitados para cargar la información que la Ley les exige, puesto que la solicitud de habilitación o deshabilitación no supone una modificación de los términos previstos en las normas especiales para reportar información.

Corresponde entonces al municipio prestador directo y a las empresas que prestan los servicios públicos, cargar la información que el ordenamiento jurídico les exige, y en evento de que se presenten dificultades en el cargue o reporte de la información por la no habilitación de formato o formulario correspondiente, la Resolución No. SSPD 20131300008055, del 1 de abril de 2013, prevé en el artículo 18 el procedimiento a seguir:

"Los que requieran la habilitación de formatos y/o formularios que según la normatividad les corresponda reportar al SUI, deberán presentar ante el Coordinador del Grupo SUI de la Superintendencia, una solicitud escrita a través de cualquiera de los siguientes medios: vía mesa de ayuda con usuario y contraseña SUI, correo electrónico oficial del solicitante y oficio firmado por el representante legal del prestador, alcaldía, gobernación, corporación autónoma regional y/o gestor del Plan Departamental de Aguas. La petición deberá describir en forma clara y precisa cuales van a ser los formatos y/o formularios a habilitar, así como su periodicidad, periodo, año y servicio."

No es de recibo el argumento expuesto por el municipio, según el cual, no puede predicarse un incumplimiento de su parte porque no estaba habilitado el formato para cargar las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, dado que la entidad contaba con las herramientas que le permitían subsanar las dificultades que pudieran afectar al municipio en el cargue de la información al SUI.

Por otro lado, para que los planteamientos esgrimidos por el recurrente fueran tenidos como eximente de responsabilidad, debían enmarcarse dentro de los conceptos de fuerza mayor o caso fortuito, que están definidos por el Artículo 1° de la Ley 95 de 1890, en los siguientes términos: "Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público".

Al respecto el tratadista Arturo Alessandri Rodríguez, en su obra "De la responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil", Páginas 599 y 600, sobre el caso fortuito y la fuerza mayor señala:

"El caso fortuito o la fuerza mayor supone, (...), un acontecimiento imprevisto e irresistible. Es imprevisto, cuando no hay ninguna razón especial para creer en su realización e irresistible, cuando no es posible evitar sus consecuencias.

El hecho debe ser imprevisto e irresistible en sí mismo, es decir, que ni el agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas circunstancias de tiempo y de lugar habrían podido preverlo. Se requiere una imposibilidad absoluta. Una simple dificultad o una imposibilidad relativa, personal del agente, no basta; la culpa se aprecia en abstracto. Un hecho que hubiera podido prever y evitar con

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

mayor diligencia o a costas de un mayor esfuerzo o sacrificio no es caso fortuito; un hombre prudente lo habría previsto y evitado. Esto es suficiente para privarlo de ese carácter."

En reiterada jurisprudencia se ha estudiado lo referente al caso fortuito o fuerza mayor, *de donde se destaca lo siguiente*³:

"Según el verdadero sentido o inteligencia del artículo 1º de la ley 95 de 1890, los elementos integrantes del caso fortuito o fuerza mayor (...), deben ser concurrentes (imprevisibilidad e irresistibilidad) lo cual se traduce en que si el hecho o suceso ciertamente es imprevisible pero se le puede resistir, no se da tal fenómeno, como tampoco se configura a pesar de ser irresistible pudo preverse. De suerte que la ausencia de uno de sus elementos elimina la estructuración de la fuerza mayor o caso fortuito.

Si sólo puede calificarse como caso fortuito o fuerza mayor el hecho que concurrentemente contemple los caracteres de imprevisible e irresistible, no resulta propio elaborar un listado de los acontecimientos que constituyen tal fenómeno, ni de los que no lo constituyen. Por tal virtud, ha sostenido la doctrina nacional y foránea que un acontecimiento determinado no puede calificarse fatalmente, por sí mismo y por fuerza de su naturaleza específica, como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, puesto que es indispensable, en cada caso o acontecimiento, analizar y ponderar todas las circunstancias que rodean el hecho".

De la jurisprudencia y la doctrina expuesta, podemos concluir que, en relación con la fuerza mayor o caso fortuito, se debe tener en cuenta:

- a) En cada caso concreto se debe analizar y ponderar todas las circunstancias que rodean el hecho, para determinar si este constituye o no fuerza mayor o caso fortuito.
- b) Los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito deben ser alegados y probados por quien los invoca. Es decir, la carga de la prueba la debe soportar quien invoca tales hechos y no quien debe valorarlos.
- c) Debe tratarse de hechos imprevisibles e irresistibles, y por tanto sobrevinientes; esto es, que su previsión escape en condiciones normales a cualquier sujeto y no a una persona en particular, y que además de no haberse podido prever, sea imposible evitar que el hecho se presente.
- d) No constituyen fuerza mayor o caso fortuito los hechos que acontecen frecuentemente o con cierta periodicidad, ni hay fuerza mayor o caso fortuito cuando el obstáculo dificulta el cumplimiento de una obligación, pero no la imposibilita.
- e) Los hechos no deben ser atribuibles a la culpa, esto es, negligencia, descuido o impericia, de la persona que los invoca. En cuanto a este supuesto, la entidad advierte que la Resolución No. SSPD 20111300017605 del 29 de junio de 2011, los prestadores de los servicios públicos deben actualizar la información según los formatos dispuestos en RUPS para tal fin, por lo menos una vez al año.

Lo anterior indica que el municipio como prestador directo de los servicios públicos tenía la obligación de reportar el acto de aprobación de tarifas vigente, y para el caso bajo revisión se puede observar que el municipio de Coromoro no tomó el conjunto de medidas diligentes y pertinentes para reportar la información en los formatos habilitados por en el SUI, puesto que según lo advirtió el grupo SUI de la superintendencia, el formato para reportar el PDF del acto de aprobación de tarifas se encontraba habilitado en vigencias anteriores.

En este punto es necesario señalar que en los artículos 6.3.3.2., 7.3.3.2. y 8.3.3.5. del Anexo de la Resolución Compilatoria No. 20101300048765, del 14 de diciembre de 2010 *"Por la cual se adiciona un artículo y se modifica el Anexo de la Resolución Compilatoria SSPD 20094000015085 del 11 de junio de 2009"*, se encuentra la obligación de los prestadores de remitir a esta superintendencia a través de la página del SUI, en formato pdf o tif, copia del acto por medio del cual la entidad tarifaria local adopta el estudio de costos y tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Dicho reporte al SUI se debe realizar cada vez que la autoridad tarifaria local emita el acto de aprobación de tarifas, al día calendario siguiente a su expedición.

En virtud de lo anterior, y al ser el formato "Acto de aprobación de tarifas" de cargue eventual, el municipio contaba con los siguientes formatos habilitados en el SUI, para reportar éste acto administrativo en el SUI, así:

³ Sentencia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil 20 de noviembre de 1989

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

AÑO	NOMBRE DE LA EMPRESA	SERVICIO	TOPICO	PERIODO	FORMATO	ESTADO	FECHA DE CERTIFICACIÓN
2006	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE COROMORO	ASEO	Comercial y de Gestión	Anual	ACTO APROBACION DE TARIFAS (PDF o TIFF)	Certificado No Aplica	2009-06-22 22:28:56
2007	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE COROMORO	ASEO	Comercial y de Gestión	Anual	ACTO APROBACION DE TARIFAS (PDF o TIFF)	Certificado No Aplica	2009-06-22 22:30:57
2008	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE COROMORO	ASEO	Comercial y de Gestión	Anual	ACTO APROBACION DE TARIFAS (PDF o TIFF)	Certificado No Aplica	2009-10-17 17:55:22
2009	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE COROMORO	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestión	EVENTUAL 0	ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS ACUEDUCTO PDF	Certificado No Aplica	2013-10-07 15:51:44
2009	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE COROMORO	ALCANTARIL LADO	Comercial y de Gestión	EVENTUAL 0	ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS ALCANTARILADO PDF	Certificado No Aplica	2013-10-09 11:06:02
2009	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE COROMORO	ASEO	Comercial y de Gestión	Anual	ACTO APROBACION DE TARIFAS (PDF o TIFF)	Certificado No Aplica	2013-10-22 20:53:09
2012	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE COROMORO	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestión	EVENTUAL 0	ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS ACUEDUCTO PDF	Pendiente	
2012	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE COROMORO	ALCANTARIL LADO	Comercial y de Gestión	EVENTUAL 0	ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS ALCANTARILADO PDF	Pendiente	
2012	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE COROMORO	ASEO	Comercial y de Gestión	Anual	ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS ASEO PDF	Certificado	2013-09-12 16:08:00

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

En este contexto, la entidad observa que la conducta del municipio de Coromoro no se ajustó a la normativa vigente en materia de cargue al SUL, que exige una actualización permanente de la información, y como consecuencia del desconocimiento de esta obligación, no pudo cargar la información con sujeción al plazo previsto en el artículo 7° del Decreto 1639 de 2013.

De acuerdo con lo anterior, se concluye, que para que los argumentos del recurrente sobre la no habilitación de los formatos como causal de exoneración de responsabilidad, sean tenidos en cuenta como hechos de fuerza mayor o caso fortuito, debió demostrarse la ocurrencia de estos y la proporción en que influyeron para la determinación de una exoneración de responsabilidad por parte del alcalde municipal.

Sin lugar a dudas, los hechos que aduce el recurrente no se configura en hechos imprevisibles e irresistibles, y por tanto sobrevinientes, pues es evidente que los mismos no hacían imposible el cumplimiento del criterio en mención, puesto que de haber actuado con diligencia y pertinencia hubiera podido reportar la información solicitada, o se hubiera podido percatar con mayor antelación de los motivos por los cuales no pudo realizar los cargues respectivos.

4.2. Argumentos expuestos sobre la descertificación como una sanción

De cara a las aseveraciones del recurrente que el procedimiento que se surte para la certificación en el SGP-APSB, es un procedimiento sancionatorio, la SSPD le aclara que el proceso de certificación es una actuación administrativa que tiene como fundamento el debido proceso administrativo.

Ahora bien, es preciso señalar que el proceso de certificación es una actuación que se adelanta en estricto cumplimiento de las disposiciones legales teniendo a cada municipio de manera independiente y para cada ente territorial se analizó el cumplimiento de requisitos para efectos de obtener la certificación de la vigencia 2012.

Dicho proceso no se entiende como una actuación sancionatoria, por ello, las normas procesales que se deben a aplicar al presente proceso de conformidad con el artículo 8° del Decreto 1639 de 2013, son las consagradas en el procedimiento administrativo general y no en el sancionatorio como en forma equivocada se pretende hacer ver.

La Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, confiere a las autoridades del sector de servicios públicos la facultad de producir, unilateralmente, actos administrativos particulares y generales; por eso consagra reglas especiales sobre procedimientos administrativos, las cuales están previstas en los artículos 106, 115 y se relacionan con los actos de carácter particular y concreto que las autoridades pueden producir, como lo son las sanciones.

El artículo 79 de la Ley 142 de 1994, establece que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene las funciones de vigilancia, control y sanción de las empresas de servicios públicos domiciliarios; a su vez, el artículo 81 de la misma le consagra las sanciones que puede imponer la SSPD a los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Así las cosas, y debido a que la descertificación de los municipios no se encuentra señalada como una sanción de las que pueda imponer esta superintendencia en virtud del ejercicio de la facultad sancionatoria, se aplican las normas del proceso administrativo general y no las del proceso administrativo sancionatorio, se reitera.

Como corolario de lo expuesto, no son de recibo para esta entidad las afirmaciones realizadas por el impugnante en el sentido que esta entidad debió hacer uso de la facultad sancionatoria desde el punto de vista preventivo, por cuanto al haberse regido el proceso de certificación SPG-APBSB, vigencia 2012, por el proceso administrativo y no sancionatorio, dicha facultad no se tenía que surtir dentro de esta actuación.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no acreditó el cumplimiento del requisito que se le demanda; por lo tanto el recurso formulado por el señor WILSON HERNÁN SANABRIA PICO como alcalde municipal de COROMORO, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20144010010035 del 4 de abril de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de COROMORO, del departamento de SANTANDER, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de SANTANDER, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra la misma no procede recurso alguno por estar concluido el procedimiento administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Juan Leonardo Álvarez Arévalo - Contratista Grupo de Certificaciones e información

Revisó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e información

Aprobó: Giovanni Bonilla Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e información

Visto Bueno: Martha Lucía Durán - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Ángela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 20094018865580955A